

FERNANDO CERMESONI

Consejero y Profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires
y Profesor Extraordinario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

Código único de las Obligaciones y Contratos

**Antecedentes de Legislación Comparada
Supresión de las antinomias existentes en nuestros
Códigos Civil y Comercial**



BUENOS AIRES
IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD

1940

FERNANDO CERMESONI

Consejero y Profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires
y Profesor Extraordinario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires



Código único de las Obligaciones y Contratos

Antecedentes de Legislación Comparada
Supresión de las antinomias existentes en nuestros
Códigos Civil y Comercial



BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE ORDER	49.530
UBICACIÓN	C. 1966

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD

1940





Código único de las Obligaciones y Contratos

Antecedentes de Legislación Comparada

Supresión de las antinomias existentes en nuestros Códigos Civil y Comercial

Por el doctor FERNANDO CERMESONI

1

Grande legis ævi spatium . . . afirmaba con razón la sabiduría antigua, porque las leyes envejecen con el andar del tiempo, no siendo las mismas ajenas a la regla universal de la evolución.

Por ello, también se ha afirmado por un eminente autor, que en materia de derecho mercantil, especialmente, no modificar significa quedarse atrás.

La reforma, pues, de nuestra legislación, viene a llenar una sentida necesidad. Pero, esas reformas deben hacerse lentamente, con método, auscultando la opinión de todos los intereses comprometidos, porque la ley, al decir de los autores, debe adaptarse a las necesidades del comercio, sin que pueda exigirse que sea el comercio el que se adapte a los caprichos de la ley.

Al iniciarse hoy en nuestra República, después de su organización definitiva, la era que llamaríamos de la reforma legislativa, deben incorporarse los verdaderos adelantos de la ciencia jurídica. Entre los numerosos problemas que ha de abarcar esa reforma, como lo hiciera notar en la conferencia que en acto oficial pronunciara en la Facultad de Ciencias Económicas celebrando el cincuentenario del Código de Comercio, ocupa un lugar destacado el «código de las obligaciones y contratos».

Si nos detenemos en el estudio del actual movimiento científico del derecho, vemos que como resultado de esos esfuerzos, se destaca el «código único de las obligaciones y contratos». De ello ya se han



hecho eco países como Suiza y Polonia; este último, con su reciente código que fuera sancionado como la última palabra del derecho contemporáneo, antes de los sucesos europeos. Otros países como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, se rigen en la materia, por estos principios uniformes.

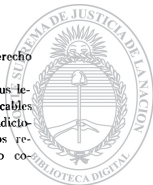
No menos digno de mención es el proyecto de ese código de las obligaciones, para Francia e Italia, elaborado por esa pléyade de eminentes juriconsultos que trataron de condensar en esos cuerpos de leyes, los preceptos legales que debían regir las relaciones de ambos países, en cuanto a las obligaciones y a los contratos.

Entre nosotros no puede hablarse de reforma y de adelanto en materia de legislación, si no abordamos en esa forma el problema. Es pues de carácter previo, antes de sancionarse por el Congreso el proyecto de reforma al Código Civil, que se dicte el código único de las obligaciones y contratos para el derecho civil y el comercial.

La aplicación de los principios del derecho comercial se extiende cada día más. Así el artículo 7º del Código de Comercio, como es sabido, establece que si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil. Se consideran asimismo actos de comercio los que se refieren a los documentos a la orden; los actos realizados por las sociedades anónimas cualquiera sea su objeto.

Lo mismo acontece, entre otros supuestos, con el artículo 3º de la Ley 11.645, que declara que las sociedades de responsabilidad limitada son comerciales, cualquiera sea su objeto, agregando los artículos 23 y siguientes, que las sociedades civiles o comerciales existentes, o las que se constituyan después, podrán transformarse en sociedades de responsabilidad limitada sin perjuicio de terceros, siendo aplicables a esta clase de sociedades, las disposiciones del Código de Comercio y las del Código Civil que se conformen con su naturaleza jurídica y no hayan sido modificadas por las disposiciones precedentes.

No es necesario detenerse en otras disposiciones y supuestos legales, para comprender que el código único de las obligaciones y contratos viene a llenar una sentida necesidad en la legislación; máxime, cuando la aplicación de estos preceptos legales, está demostrando que numerosas personas que no son comerciantes, son llevadas por el imperio de disposiciones legales, a resolver sus cuestiones y litigios por las reglas del derecho mercantil. Los preceptos generales de las obligaciones y de los contratos, deben ser, pues, regidos por una ley uniforme dando término, una vez por todas, a las anti-



nomías o contradicciones entre estas dos ramas afines del derecho privado.

El grado de adelanto de un país lo refleja la sabiduría de sus leyes. No es admisible que idénticas instituciones jurídicas, aplicables a los mismos casos, se rijan por imperativos exegeticos contradictorios, porque la justicia no tiene para un mismo supuesto, dos reglas distintas, aunque se trate del derecho civil y del derecho comercial.

Como veremos de inmediato, plagados de esas contradicciones están nuestros Códigos Civil y Comercial. Y esas antinomias, sólo podrán ser resueltas con la implantación del código único de las obligaciones y contratos.

II

El nuevo código único de las obligaciones de Suiza, entró en vigor el 1º de enero de 1912 y reproduce casi totalmente las disposiciones del código anterior de las obligaciones, del 14 de junio de 1881, incorporando algunas reformas de las que haremos mención sucesivamente. Este nuevo código de las obligaciones, forma parte del Vº Libro del Código Civil Suizo.

El código federal de las obligaciones del 14 de junio de 1881 que constituye la base del nuevo código de las obligaciones Suizo, en vigor en 1912, legislaba sobre las siguientes cuestiones, en treinta y cuatro títulos, a saber:

En el título 1º, se ocupaba de la constitución de las obligaciones. En los títulos sucesivos, se refería a los efectos de las obligaciones; a la prescripción; modalidades de las obligaciones; de la cesión o transferencia de créditos; de los derechos reales sobre bienes muebles; de la renta y del cambio; del alquiler o arriendo de las cosas; del préstamo de uso o comodato; del préstamo de consumo; préstamos simples; del alquiler de servicios; del alquiler de obra por presupuesto o por contrata; del contrato de edición; del mandato; de los apoderados, representantes o mandatarios comerciales y de los viajantes de comercio; del contrato de comisión; del contrato de transporte o de los trajineros por tierra y por agua; de la gestión de negocios; del depósito; de la fianza; del juego y de la apuesta; del contrato de renta vitalicia; de la sociedad simple; de las sociedades en nombre colectivo; de la sociedad en comandita; de la sociedad anónima o sociedad por acciones; de las asociaciones; de otras sociedades; de la letra de cambio; del cheque; de otros bille-

tes y mandatos a la orden; de los títulos al portador; del registro del comercio, de las razones sociales y otras, y de los libros de contabilidad; y, por último, en el título XXXIV se ocupa de las disposiciones transitorias.

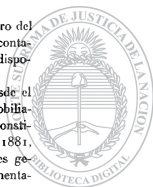
El nuevo código único de las obligaciones Suizo, en vigor desde el año 1912, no se refiere exclusivamente a las transacciones mobiliarias, como consecuencia de la revisión del artículo 64 de la Constitución Federal. Se distingue esencialmente del código del año 1881, por una metodología lógica, y si bien conserva las disposiciones generales anteriores, ha incorporado algunos preceptos complementarios, bien importantes por cierto, a saber:

La lesión ha sido considerada en el nuevo código, como una causa de rescisión de los contratos — artículo 21 —; el capítulo de los actos ilícitos ha sufrido cambios considerables. Se ha legislado, asimismo, sobre la venta de inmuebles, como también en materia de donación. Se han incorporado nuevos textos relativos a la cesión de deudas que legislan los artículos 175 y siguientes del nuevo código de las obligaciones Suizo. En el título de la venta, el nuevo código ha legislado en los artículos 226 y siguientes, sobre la venta a plazos, como asimismo sobre la venta en remate — artículos 229 y siguientes —. También, el nuevo código, en el artículo 202, ha legislado sobre la garantía de los vicios redhibitorios en la venta de ganado y en las modalidades especiales relativas al arrendamiento de ganado—bail a cheptel, artículo 302—. Se ocupa del corretaje en los artículos 402 y siguientes. En los artículos 363 y siguientes, se refiere al contrato de alquiler de obras, con las reformas incorporadas en los artículos 520 y siguientes. Contiene también una reforma integral dedicada al contrato de locación de servicios, que ya denomina contrato de trabajo, recurriendo a la terminología actual. Ese contrato de trabajo está legislado en el nuevo código de las obligaciones en el título X, artículos 319 y siguientes.

Como se ha hecho notar, es un código completo y único de las obligaciones y contratos.

III

El código de las obligaciones y contratos de Polonia, como aconteció con el proyecto análogo elaborado por una doble comisión de juriconsultos franceses e italianos, publicado en octubre de 1927, representa la más alta expresión de la ciencia jurídica en el derecho privado. Este código entró en vigor el 1º de julio de 1934 y se





compone de 643 artículos, aproximándose en ello al código análogo francés e italiano que comprende 739 artículos y al código suizo de las obligaciones que, con exclusión de los preceptos del derecho mercantil, asciende a 611 artículos.

Esas manifestaciones del pensamiento jurídico contemporáneo, condensadas en esos códigos de las obligaciones y contratos, han de terminar por la aceptación de ese cuerpo uniforme de legislación por los países más adelantados. Por ello podemos afirmar que en ninguna de las obligaciones sociales, se está más cerca de este arquetipo del derecho universal, que en las derivadas de los preceptos generales de las obligaciones y de los contratos.

El código único de las obligaciones y contratos que encierra los principios básicos de las normas jurídicas de la contratación, ha de ser sin duda el primer paso para que los pueblos americanos, puedan aproximarse aún más por medio de la unificación de las leyes.

Consecuente con estas ideas, el Instituto Internacional de Roma para la unificación del derecho privado ha propuesto a la Sociedad de las Naciones, un proyecto de unificación de las ventas internacionales de las mercaderías, el que ha merecido el aplauso de las respectivas comisiones de justicia de varios países.

Ese código de las obligaciones y contratos de Polonia, se compone de dos partes bien distintas. Una de ellas se refiere a las fuentes de las obligaciones. La otra, a la reglamentación de los principales contratos. Así, en el primer libro, se ocupa de las fuentes de las obligaciones; de su formación o constitución; transferencia de los derechos y vínculos que derivan de las obligaciones; extinción de las mismas; y derechos de los acreedores para atacar los actos de sus deudores. Luego, en los títulos VI a XVII, se ocupa de la reglamentación de los principales contratos, como la venta, sociedad, mandato, depósito, etc....

Referirnos a cada uno de esos títulos en su detalle, para poner de manifiesto las inspiraciones adelantadas que los motivaron, sería dar a este trabajo de síntesis, las proyecciones de una obra, ajena a nuestro actual propósito.

IV

El texto definitivo del proyecto de derecho civil de las obligaciones y de los contratos para Francia e Italia, fué aprobado por las comisiones respectivas de juristas en París, en octubre de 1927. Su iniciativa se debe al conocido profesor italiano Victorio Scialoja, la



cual tuvo calurosa acogida por el profesor Fernando Larnaude, que ocupaba el cargo de decano de la Facultad de Derecho de París.

Como decía la comisión respectiva en la exposición de motivos, la uniformidad del derecho privado entre los pueblos civilizados, constituye un ferviente anhelo impuesto por la comunitas gentium. Esa uniformidad, por lo menos en materia de obligaciones, fué una realidad histórica en Europa durante siglos, hasta que a fines del siglo XVIII, la formación de los grandes estados determinó el dictado de sus códigos nacionales.

El Código de Napoleón de 1804, Código Civil Francés, por sus sabias disposiciones y su admirable y clara redacción, que no ha sido igualada, sirvió de modelo a la legislación de los principales países, tanto de Europa, cuanto de la América del Sud. Ello ha preparado esa uniformidad de doctrinas jurídicas que harán más fácil la implantación de ese código único de las obligaciones y contratos, para los distintos países, cuando hayan desaparecido las consecuencias perniciosas de la actual guerra europea.

Los más destacados profesores de Francia e Italia han colaborado en esa obra, siendo dignos de mención entre otros, los profesores de la talla de Vivante, Sraffa, Ascoli, Bensa, Bonelli, Chironi, Gogliolo, Coviello, Polacco, Lyon-Caen, Capitani, Geny, Petit, Pillet, Renault, Thaller, Ripert, Tissier, Valéry, Weiss, Wahl, etc. . . .

El texto completo del nuevo código de las obligaciones y contratos para Francia e Italia, consta de 739 artículos, distribuidos en veinte títulos. La parte general del proyecto se refiere a los principios relativos a las obligaciones y a los contratos. Así, el capítulo general se refiere a la fuente de las obligaciones; el II, a los efectos de las mismas; el III, a las diversas especies de obligaciones; el IV, a la extinción de las obligaciones; el V, a la cesión de créditos; y el VI, a la prueba de las obligaciones y a la del pago. La parte especial se divide en veinte capítulos dedicados a la venta; a la permuta; a la locación; al contrato de trabajo; al contrato de locación de servicios; al contrato de sociedad; al mandato; a la transacción; al contrato de renta perpetua; al contrato de renta vitalicia; al juego y a la apuesta; al comodato; al mutuo; al depósito; al secuestro; a las disposiciones especiales para los contratos de transporte y hoteleros; a la prenda; a la anticresis; y a la fianza.

V

El estudio de estos proyectos y legislaciones relativas al código único de las obligaciones y contratos, nos demuestra que esta es la tendencia del pensamiento jurídico contemporáneo.

Al abocarnos al estudio de las reformas a nuestra legislación, tanto civil, cuanto comercial, hemos de analizar como cuestión previa, si debemos legislar sobre el código único de las obligaciones, de acuerdo con los precedentes estudiados.

Nos declaramos pues, partidarios de este sistema que colocaría a nuestra legislación, entre las más adelantadas. El doctor Leopoldo Melo se hizo eco de ello, como Presidente de la Comisión de Reformas al Código de Comercio.

Con este código único de las obligaciones, podemos afirmar que nos adelantamos a nuestros tiempos, implantando en el continente americano el sistema más moderno de legislación, que, aparte de suprimir las antinómicas entre el código civil y el comercial, marcará en los futuros congresos internacionales, el primer paso hacia la verdadera unificación del derecho privado americano.

El código único de las obligaciones y contratos, debe comprender entre nosotros, los principios generales de todo el régimen de las obligaciones, de conformidad a los precedentes estudiados, y la legislación sobre los principales contratos, como ser la compraventa; la sociedad; la locación de servicios y de obra; el mandato; el mutuo; el depósito; la prenda; la fianza; etc.

Debemos hacer notar que, evidentemente, aquellos códigos que hemos mencionado, que siguen esta tendencia, se han ocupado de muchos contratos que no serán materia de inclusión en nuestra reforma, debiendo comprender sólo los principales, entre otros, los mencionados precedentemente. Aquellos códigos deberán servirnos como antecedentes, sin olvidar el estado especial de nuestra legislación.

Cada país, como es notorio, tiene problemas distintos a resolver. Así, al dictar Suiza el código único de las obligaciones y contratos, cuyo estudio sintético hemos recordado, ha debido tener en cuenta circunstancias especiales y legislar en este código, también instituciones netamente mercantiles, como ser todo lo relativo a la legislación cambiaria; al cheque; registro de comercio, etc.

En cambio, entre nosotros, ello no debería formar parte del código único de las obligaciones, sino del respectivo código de comercio.





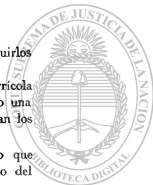
En igual sentido, el código único de las obligaciones y contratos para Francia e Italia, mencionado precedentemente, no ha podido llevar la reforma sino hasta donde le ha sido posible a fin de no dar por el suelo, con el resto de los preceptos legales de sus códigos, que debían quedar vigentes. Si se hubiese hecho más extensa aquella reforma, se habrían suscitado dificultades al ser tratada su sanción definitiva, por los poderes constituidos de cada país, lamentando que tan noble iniciativa no haya podido lograr su aprobación final. Ello no obstante, constituye un valioso aporte a la ciencia jurídica, porque sintetiza el esfuerzo de diez años de estudios meditados, por los más renombrados jurisconsultos. Tal esfuerzo, si bien no ha logrado el éxito que su sanción hubiese significado, dadas las condiciones creadas en los últimos tiempos, en las relaciones diplomáticas de ambas naciones, no por ello dejará de ejercer poderosa influencia en aquellos países, que como el nuestro, necesitan las reformas de sus leyes.

El código único, legisla los principios generales de las obligaciones y contratos propios del derecho civil y del derecho comercial, con un criterio uniforme, evitando las antinomias que existen actualmente entre ambas legislaciones. Tiene en cuenta que en la época actual muchas instituciones son comunes a la vida civil y a la mercantil, como los títulos a la orden y al portador, las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etc.

Por otra parte, el éxito y los efectos prácticos alcanzados por los países que han adoptado el código único de las obligaciones y que hemos citado; constituyen un desmentido a las críticas que formulara hace muchos años, entre otros autores, Hércules Vidari, en su *Curso de Derecho Comercial*.

El sistema del código único de las obligaciones es, pues, más moderno y perfecto que el seguido por el Código Civil Alemán de 1900, que tiene tantos años de vigencia y muchas de cuyas doctrinas ya han sido modificadas, como lo demuestra el proyecto del código único de las obligaciones y contratos para Francia e Italia. Ese código único de las obligaciones y contratos, como se ha expresado, deberá contener los principios comunes y uniformes al régimen de las obligaciones y contratos, propios del derecho civil y del derecho comercial, reservando a cada uno de esos códigos, su legislación privativa.

Con ese código único de las obligaciones, se solucionarían también los problemas creados por esa tendencia bien marcada, a ampliar el campo de acción del derecho mercantil. Así, muchos actos que antes



no se tenían por mercantiles, hoy se siente la necesidad de incluirlos en el número de tales.

Notables juriconsultos han sostenido que la industria agrícola debe ser una rama del comercio, porque la tierra no es sino una vasta máquina de producción, sobre todo cuando se transforman los productos, como acontece con los ingenios de azúcar.

Consecuente con ello, nuestra jurisprudencia ha sostenido que «son actos comerciales, la extracción y venta de un producto del suelo, cuando se adquiere para servir de base a operaciones mercantiles (*Jurisprudencia Argentina*, tomo I, página 736).

El código único de las obligaciones traerá para las arcaicas instituciones del derecho civil, la incorporación de nuevos principios del derecho mercantil. En otros términos, como dice un conocido autor ya nombrado, solucionaría la necesidad que tiene el derecho civil, de sentir el hálito de la nueva vida que se agita a nuestro alrededor y de depurar su sangre con la asimilación de los adelantos incorporados en la legislación por el código mercantil.

VI

Las antinomias entre los Códigos Civil y Comercial, son bien numerosas por cierto. A ellas hemos de referirnos como una de las razones que harán necesario el dictado del código único de las obligaciones y contratos, siguiendo los precedentes indicados.

Esas contradicciones de los textos legales de uno y de otro código, se justifican también entre nosotros, por cuanto el Código de Comercio fué dictado como ley de la nación, en el año 1862, antes de la vigencia del Código Civil, como es notorio. Se explica que el Código de Comercio del año 1862 legislase sobre la teoría general de la ley; sobre contratos y principios generales de las obligaciones y sus clases; y, por último, sobre el modo de extinguirse las obligaciones.

El Código de Comercio actualmente vigente, promulgado el año 1889, hubo de suprimir, pues, esta legislación que comprendía 365 artículos, toda vez que en ese entonces ya se había dictado el Código Civil, que contenía, en el libro II, toda la doctrina general sobre la materia.

I. — Si confrontamos nuestro Código de Comercio con el Código Civil, saltan de inmediato a la vista estas contradicciones: El artículo 216 del Código de Comercio, aplicando el principio casi unifor-



me en el derecho universal, aceptado en los códigos únicos de las obligaciones, establece la condición resolutoria en los contratos bilaterales, en el sentido de que la parte lesionada podrá pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato; ventaja que no acuerda el Código Civil— artículo 1204—. Como efecto de los contratos, en esta legislación, debe requerirse previamente el cumplimiento de la convención y recién, cuando ello no pudiese realizarse, se habilita la otra vía, o sea, la rescisión. Por eso el artículo 1204 agrega: «el contrato no podrá disolverse, y sólo podrá pedirse su cumplimiento». Esta contradicción ha tratado de suprimir el proyecto de reforma al Código Civil, imitando al Código de Comercio, más adelantado por cierto.

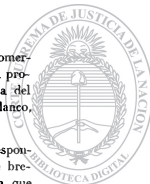
II. — La doctrina de la causa ha sido sintetizada por el artículo 212 del Código de Comercio con un criterio científico y moderno, por cierto, amparando los derechos de los terceros de buena fe. Reza su texto: «La falta de expresión de causa o la falsa causa, en las obligaciones transmisibles por vía de endoso, nunca pueden oponerse al tercero, portador de buena fe». De acuerdo con ese imperativo exegético, el título que surge a la vida jurídica es nuevo — «ex novo» —, porque no lleva en sí, las consecuencias, o vicios del título originario, lo que no acontece en general en el régimen del derecho civil.

El suscriptor de una letra — dice el artículo 690 del Código de Comercio, — está obligado a pagar su importe, aunque haya sido violentamente transmitida por un intermediario cualquiera, si el portador la ha recibido de buena fe en el curso de sus operaciones habituales, de persona que tenía facultad de transmitirla.

En cambio, el Código Civil sienta un principio opuesto. El artículo 3270, establece que: «nadie puede transmitir a otro sobre un un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto, un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere». El artículo 2412, ni la excepción del artículo 3271, tienen la extensión ni el efecto amplio que acuerda a los terceros, el artículo 212 del Código de Comercio.

Predomina en la legislación comercial el «favor creditoris» a diferencia de lo que acontece con los demás institutos jurídicos, donde impera la máxima universal, o sea, «favor debitoris».

La transmisión de crédito es sumamente dificultosa por el derecho civil actual, pues, la cesión es una formalidad complicada, de-



biendo siempre notificarse al deudor cedido. El Código de Comercio ha roto los vínculos que lo ataban con el derecho civil; ha proclamado un verdadero adelanto que debe incorporar la ciencia del derecho general, legislando que el endoso simple, aún en blanco, opera la transmisión del crédito.

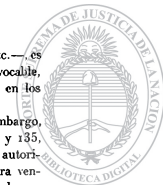
III. — En cuanto a la perfección de los contratos por correspondencia, la anomalía es evidente. Sin referirnos por razones de brevedad a las doctrinas y antecedentes de legislación comparada que estudiamos en nuestra obra sobre «Contratos Comerciales», debemos recordar que el artículo 215 del Código de Comercio establece que: «el consentimiento manifestado a un mandatario o emisario para un acto de comercio, obliga a quien lo prestó, *aún antes de transmitirse al que mandó el mensajero*».

En cambio, el artículo 1154 del Código Civil dispone que la aceptación hace *solo perfecto el contrato desde que ella se hubiese mandado al proponente*.

Los principios, pues, son diferentes en una y otra legislación. Para algunos autores debiera aceptarse el criterio del Código Civil, por cuanto se dice que la reforma del Código de Comercio de 1889, modificó el artículo 204 del antiguo Código de Comercio, que admitía la teoría del conocimiento disponiendo que el contrato por carta se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que acepta el negocio llega al proponente. Pero, frente a la contradicción de los principios exegéticos analizados, ello no deja de constituir más que una doctrina interpretativa.

En el proyecto franco-italiano de las obligaciones y contratos, tratando de uniformar la doctrina al respecto, se aceptó el criterio del Código de Comercio Italiano, sentando el principio de que ya se trate de contratos unilaterales o bilaterales, entre presentes y entre ausentes, el contrato se perfecciona por el conocimiento que cada una de las partes haya tenido de la voluntad concordante de la otra, presumiéndose tal conocimiento por el hecho de probarse que la declaración de voluntad de una de las partes, haya llegado al domicilio de la otra. Este antecedente demuestra la ventaja de la uniformidad de principios, que reporta la reforma del código único de las obligaciones y contratos.

IV. — En cuanto a los derechos personales, debemos mencionar las contradicciones de criterios seguidos por el legislador, al referirse a la emancipación civil y a la comercial. En el derecho civil, como es sabido, la única emancipación que reconoce nuestra ley — a diferen-



cia de otros sistemas legislativos como el francés o el alemán, etc.—, es la que se opera por el matrimonio. Esa emancipación es irrevocable, en principio, salvo el supuesto de la nulidad del matrimonio, en los casos que contempla la ley — artículos 132 y siguientes.

Ese menor emancipado por matrimonio, no puede, sin embargo, realizar los actos que prohíbe el Código Civil — artículos 134 y 135, — salvo en este último supuesto — artículo 135—, con la autorización del Juez. Así, se requiere esa conformidad judicial para vender los fondos o rentas públicas, las acciones de compañías de comercio o de industrias; contraer deudas que pasen del valor de quinientos pesos; hacer arrendamientos como arrendadores o arrendatarios por plazo que exceda de tres años — salvo los arrendamientos de la agricultura —; recibir pagos que excedan de mil pesos, etc.

En cambio, el Código de Comercio — artículo 10—, establece criterio opuesto, autorizando la emancipación mercantil a los diez y ocho años con efectos amplios, que no admite el Código Civil, toda vez que esa emancipación es revocable — artículo 12 — en los casos referidos por el Código y autoriza al menor hasta a hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones que contraiga como comerciante — artículo 19—, y a realizar todos los actos jurídicos inherentes al giro de su comercio o industria. Todo ello demuestra la dualidad de criterios seguidos por una y otra legislación.

No aceptamos la opinión del doctor Salvat (Tratado de Derecho Civil, página 343), cuando sustenta que el artículo 10 del Código de Comercio, se refiere a la emancipación civil, ni la afirmación que formula el mismo autor equiparando en sus efectos, la capacidad del menor autorizado por los padres y por los tutores (supuesto este último, rechazado por los fallos de los Tribunales), para ejercer el comercio, a la del menor emancipado. Este autor, ha querido uniformar el criterio contradictorio de ambas legislaciones; pero, los textos legales son diversos y no admiten tal armonía, como resulta de sus propios términos.

Por otra parte, mal puede el Código de Comercio entender que la emancipación que menciona es la que reglamenta el Código Civil, cuando el Código de Comercio del año 1862, anterior al Código Civil, en su artículo 9, se refiere igualmente a la emancipación, cuyo texto, en general, repite el actual Código de Comercio. Aquel código del año 1862, exigía la autorización expresa del padre o de la madre, como el actual Código de Comercio; pero contenía un agregado que no ha establecido el Código de Comercio actual, es decir, la au-



torización del curador en defecto de la del padre o de la madre. Por lo tanto, cuando el Código de Comercio habla de emancipación, se refiere a la que se opera para el ejercicio del comercio, mediando la autorización del padre o de la madre y su inscripción en el Registro Público de Comercio, independientemente de la emancipación que reglamenta el Código Civil, por efectos del matrimonio.

Una y otra emancipación tienen consecuencias y producen efectos distintos, como hemos constatado al referirnos a los textos legales expresos.

V. — No concluyen ahí las contradicciones entre el Código Civil y el Comercial. Así, por el artículo 12 del Código de Comercio, el hijo mayor de 18 años que fuera asociado al comercio del padre, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales, en las negociaciones mercantiles de la sociedad. En cambio, el artículo 279 del Código Civil, prohíbe al padre contratar con el hijo, bajo la patria potestad.

El fallido conserva la administración de los bienes de su mujer y de sus hijos, dice el artículo 107 de la ley de quiebras, reproduciendo el texto del artículo 74 de la anterior; pero, los frutos o rentas que le correspondan, pueden ser traídos a la masa de sus bienes. En cambio, el artículo 301 del Código Civil, estatuye: los padres perderán la administración de los bienes de sus hijos, cuando se hallen reducidos al estado de insolvencia y concurso judicial de sus acreedores.

VI. — Esas contradicciones entre el Código Civil y el Comercial, se hacen más numerosas o frecuentes al legislar sobre los contratos. — Veamos en primer término la compraventa. Aquí, el Código de Comercio, no prohíbe la venta de cosa ajena, siempre que el comprador ignorase que la cosa es ajena — artículo 433 —; principio opuesto al del Código Civil (artículo 1329).

En el derecho comercial, la seña o arras son a cuenta de precio — artículo 475 —; en cambio, en el derecho civil rige precepto contradictorio — artículo 1202, — pudiendo las partes retractarse perdiendo las arras.

El artículo 455 del Código de Comercio establece que, retardándose por el comprador el acto del examen o la prueba, más de tres días después de la interpelación hecha por el vendedor, se considera el acto sin efecto, y el Código Civil, en cambio, en su artículo 1337 dispone que si el comprador fuese moroso en gustar o probar la cosa, la degustación se tendrá por hecha, y la venta queda concluida.



El artículo 464 de la legislación mercantil fija un plazo de diez días para que el comprador pague el precio de los efectos, lo que no preceptúa el Código Civil. El artículo 473 del Código de Comercio agrega, que las resultas de los vicios internos de la cosa vendida, que no pudieren percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega, serán de cuenta del vendedor durante un plazo cuya fijación quedará al arbitrio de los tribunales, pero, que nunca excederá de los seis meses siguientes al día de la entrega, y el artículo 4041 del Código Civil estatuye, por el contrario, que se prescribe por tres meses la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compraventa.

El artículo 477 del Código mercantil, establece que el que durante tres años ha poseído con buena fe una cosa mueble robada o perdida, adquiere el dominio por prescripción, sea que el verdadero dueño haya estado ausente o presente; y, el Código Civil, en cambio, ha omitido legislar al respecto en modo tal, que las cosas robadas o perdidas, no tienen prescripción.

El artículo 466 del Código de Comercio no concede privilegio alguno al vendedor, salvo cuando los efectos vendidos estén en poder del vendedor, aunque sea por vía de depósito. El artículo 3893 del Código Civil, establece doctrina opuesta, al afirmar que el vendedor de cosas muebles no pagadas, goza del privilegio por el precio sobre el valor de la cosa vendida, que se halle en poder del deudor, haya sido la venta al contado o a plazo. Si la cosa ha sido revendida y se debiese el precio, el privilegio se ejerce sobre el precio. La reforma al Código Civil ha tratado de suprimir ese privilegio del vendedor, imitando una vez más al Código de Comercio, legislación más adelantada, por cierto.

Tales son las principales antinomias existentes entre los Códigos Civil y el Comercial en materia de compraventa. El código único de las obligaciones y contratos uniformará esos principios.

VII. — Si pasamos al estudio del contrato de sociedad, vemos que esas antinomias entre los Códigos Civil y Comercial son aún más remarcadas, lo que no es admisible en un cuerpo de legislación, aplicable a un mismo país, sobre un contrato de naturaleza análoga. Ante todo, debemos decir que, de acuerdo con las definiciones contenidas en nuestros códigos, tanto en la sociedad civil, cuanto en la comercial, existe el propósito de los consocios de *obtener una utilidad apreciable en dinero*, que dividirán entre sí. (Artículos 282 y 1648 del Código de Comercio y del Código Civil, respectivamente). Luego,



el requisito que caracteriza el acto comercial, o sea el lucro, viene a determinar el objeto de la sociedad civil — artículo 1648.

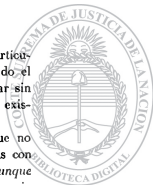
Sobre bases tan deleznales mal podía levantarse un complicado sistema jurídico de consecuencias tan distintas. El código único de las obligaciones y contratos, al sintetizar y armonizar en un solo cuerpo de legislación todos esos imperativos exegéticos. llenaría una verdadera necesidad.

En cambio, ambos códigos sientan principios contradictorios, en muchos supuestos, como nos será dado constatar. En lo demás, también repiten ambos códigos disposiciones contenidas respectivamente en cada uno de ellos. Esta circunstancia se traduce en un desprestigio, porque complica el conocimiento y la aplicación del derecho.

Así, refiriéndose el artículo 387 del Código de Comercio al socio industrial, dispone que éste sacará de las ganancias de la sociedad, una parte igual a la del socio que introdujo menos capital: y el Código Civil, contemplando el mismo supuesto, sienta principio contrario en el artículo 1781 al estatuir: «Si la prestación de los socios capitalistas fuese de partes desiguales, la parte de ganancias del socio industrial, será fijada por árbitros, si no conviniesen los socios en señalarla, y en la nota el codificador critica la opinión sustentada por el Código de Comercio, que era la que correspondía, en aquel entonces, al artículo 1853 del Código Francés.

En materia de sociedades, en el derecho civil, los socios no están obligados solidariamente por las deudas sociales; son responsables únicamente por una porción viril. (Artículos 1747-1752 del Código Civil). En el derecho comercial, como se presume la solidaridad, rige principio distinto, y el acreedor puede exigir de cualquier socio el pago total de su deuda, sin limitar su acción a la porción viril (artículo 302 del Código de Comercio).

Los artículos 419 y siguientes del Código de Comercio se refieren a los distintos supuestos en el caso de muerte del socio, con referencia a la disolución social. Esta materia ha dado motivo a interpretaciones diversas. (Rivarola Mario. *Trat. Derecho Comercial*, tomo II, pág. 713 y sigs.; Segovia. *Nota* 1519; Malagarrija Carlos. *Derecho Comercial*, página 114. Año 1940). El artículo 1758 del Código Civil proclama otro principio, disponiendo que la sociedad queda disuelta, si fuere de dos personas por la muerte de una de ellas, pero nó, si constare de mayor número de socios. El artículo 424 del Código de Comercio agrega que las sociedades no se entienden prorrogadas por la voluntad presunta de los socios, después que se



hubiere cumplido el término estipulado en el contrato, y el artículo 1766 del Código Civil, por el contrario, establece que pasado el término por el cual fué constituida la sociedad, puede continuar sin necesidad de un nuevo contrato escrito, y puede probarse su existencia por su acción exterior, en hechos notorios.

El artículo 1669 del Código Civil estatuye que el socio que no fuere ostensible, será juzgado socio con relación a las personas con quienes contrató la sociedad, *mas no con relación a terceros, aunque éstos tuviesen conocimiento del contrato social*. Es decir, que el socio no ostensible, no se considera tal con respecto a terceros en el derecho civil. En cambio, en el derecho comercial esa *responsabilidad del socio oculto, es personal y solidaria frente a los terceros* — artículo 298 del Código de Comercio, *in fine* —. Por el artículo 389 del Código de Comercio, todo contrato de sociedad debe redactarse por escrito, cuando recaee sobre cosa cuyo valor excede de mil pesos nacionales. La escritura de sociedad puede ser pública o privada. Las sociedades anónimas y las en comandita, deben constituirse por instrumento público.

En cambio, el artículo 1662 del Código Civil establece que el contrato de sociedad puede ser hecho verbalmente, o por escrito, por instrumento público, o por instrumento privado, o por correspondencia. Pero, el artículo 1184 del Código Civil dispone que deben ser hechos en escritura pública, bajo pena de nulidad, los contratos de sociedad, y la prórroga de ellos, cuando el capital de cada socio pase de mil pesos, o cuando algunos de los bienes aportados sean inmuebles.

Del estudio de esos imperativos exegéticos, se desprende que para el derecho comercial, la sociedad debe redactarse por escrito en instrumento público o privado cuando exceda de mil pesos y no se trate de sociedades anónimas o en comandita. En cambio, para el derecho civil, una sociedad que exceda de mil pesos, o cuando los bienes aportados sean inmuebles, debe extenderse en escritura pública. El derecho comercial siempre resulta más adelantado, si se le compara con el derecho civil, porque aquel derecho ha suprimido, en lo posible, la formalidad de los actos en materia de forma. He ahí, pues, otra nueva contradicción entre el Código de Comercio y el Código Civil.

Del análisis de las disposiciones que reglamenta el Código Civil en materia de sociedades, se deducen no sólo las antinomias principales especificadas en relación con el contrato de sociedad mercantil, si que también la existencia de numerosos preceptos legales que le-



gislan supuestos análogos; dificultad que también quedaría subsanada con la sanción del código único de las obligaciones y contratos.

Entre esos preceptos, pueden mencionarse los principios que contiene el Código Civil en su artículo 1652, que también legisla en forma análoga el artículo 283 del Código de Comercio. Al referirnos a estos textos legales y correlacionarlos entre sí, sólo aludimos al concepto primordial que contienen los preceptos, prescindiendo de agregados accesorios o distintos, que pudieran contener.

El artículo 1665 del Código Civil contiene los mismos principios establecidos en el artículo 298 del Código de Comercio.

El artículo 1670 del Código Civil dispone que no tienen calidades de socios, los herederos o legatarios de los derechos sociales; y el artículo 423 del Código de Comercio enuncia para el caso de disolución de la sociedad por muerte de un socio, los mismos principios. El artículo 418 del Código mercantil preceptúa que ningún socio puede transmitir a otra persona, que no sea socio, el interés que tenga en la sociedad, y el artículo 1671 del Código Civil enuncia el mismo principio.

El artículo 1672 del Código Civil dispone que la mayoría de los socios no puede alterar el contrato social; y el artículo 412 del Código de Comercio, también dispone en forma análoga.

El artículo 418 del Código de Comercio, estatuye que el socio podrá asociar a otra persona a su parte en cuanto a las utilidades que la sociedad produzca sin que por tal hecho el asociado se haga miembro de la sociedad; y, el artículo 1674 del Código Civil también establece que la cesión de los derechos de un socio a un tercero, no hará perder a aquel su calidad de tal, produciendo la cesión únicamente sus efectos en cuanto al cedente y al cesionario. Los artículos 1676 y 1723 del Código Civil estatuyen que cuando no se establece cláusula en el contrato de sociedad, el poder de administrar corresponde a todos los socios, y el artículo 411 del Código de Comercio preceptúa en sentido análogo. Los artículos 1681 y 1688 del Código Civil equivalen en cuanto a las disposiciones que contienen, a los principios que enuncia el artículo 409 del Código de Comercio.

Los artículos 1702 y 1703 del Código Civil condensan la misma doctrina a que aluden los artículos 404 y siguientes del Código de Comercio y artículo 291, inciso 4º del mismo. El artículo 1714 del Código Civil también establece el mismo concepto legal que transcribe el artículo 417 del Código de Comercio. El artículo 1721 del Código Civil es equivalente, en cuanto a las sanciones contenidas, al



artículo 405 del Código comercial. El artículo 1731 del Código Civil, establece el mismo principio a que alude el Código de Comercio en el artículo 414, en cuanto a su principio general.

El artículo 1739 del Código Civil equivale también al artículo 425 del Código de Comercio. Al mencionar unos y otros textos de los Códigos Civil y Comercial, como hemos dicho, nos hemos referido al pensamiento principal del legislador y no a los detalles accesorios que hayan podido contener estos preceptos.

Por razones de brevedad suprimimos otras analogías existentes en ambas legislaciones; pero, los casos expuestos ratifican nuestras conclusiones en el sentido de afirmar que el contrato de sociedad en la forma legislada por el Código de Comercio, hacía innecesario el dictado de una legislación independiente del Código Civil (art. 1648). Por ello, el código único de las obligaciones, constituiría un verdadero anhelo, suprimiendo las antinomias entre la legislación civil y comercial y uniformando a la vez los preceptos análogos legislados en ambos códigos.

Cumple también afirmar que la legislación del Código de Comercio, salvo las reformas que se imponen por el adelanto jurídico, constituye un cuerpo de legislación adelantado, por cuanto todos los tipos de sociedades, o intereses de las partes en juego, han sido contemplados. Así, legisla el Código de Comercio sobre las sociedades *de interés* en las cuales interviene el elemento personal en forma predominante, como acontece con las sociedades colectivas, en comandita simple, etc. . . .

Otras clasificaciones de las sociedades tienen en cuenta como elemento predominante, *el patrimonial*, y por ello en doctrina se denominan sociedades de capital, como serían las anónimas, las comanditas por acciones, y según algunos autores, las sociedades de responsabilidad limitada, que han dado motivo a discusiones sobre el particular.

Por ello, nuestro Código de Comercio tiene en cuenta en esa clasificación, la responsabilidad limitada o ilimitada de los socios que la forman.

En fin, también se contempla en esa legislación, la variabilidad o invariabilidad de su capital, para agruparlas en entidades de capital constante, o de capital variable, como acontece en las sociedades cooperativas. Es decir, en síntesis, que la ley comercial ha sido tan adelantada que ha legislado contemplando todos los intereses de las personas que desean asociarse, y la reciente ley sobre sociedades de responsabilidad limitada, como su propio nombre lo indica, ha creado

un nuevo tipo de sociedad que tiene las ventajas de las anónimas en cuanto limita la responsabilidad de los socios, sin traer aparejados los inconvenientes que, para ciertas actividades, producía el complicado régimen de las sociedades anónimas.

Por ello el artículo 23 de la ley 11.645, estatuye que las sociedades civiles o comerciales existentes, o las que se constituyan después podrán transformarse en sociedades de responsabilidad limitada, sin perjuicio de terceros. En el derecho mercantil, por lo tanto, las personas a asociarse pueden establecer la responsabilidad más grave y amplia que produce la solidaridad, como acontece con las sociedades colectivas, o bien, limitar la misma, en cuanto a los capitales que aportan, a los extremos que convengan. Existen todos los matices para graduar la responsabilidad de los socios.

Resulta, pues, innecesario mantener la legislación civil en materia de sociedades, si con una legislación única y uniforme, se reglamentan todos los derechos e intereses de las partes. Hasta el mismo Código Civil ha debido reconocerlo en parte, cuando en su artículo 1777 estatuye que en la liquidación de la sociedad se observará lo dispuesto en el Código de Comercio, sobre las liquidaciones de las sociedades comerciales. Si como hemos dicho, ambos códigos, tanto el Civil cuanto el Comercial, contemplan el lucro o la utilidad apreciable en dinero, como propósito; carece de objetivo mantener la dualidad en la legislación.

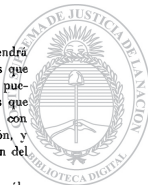
El Código Civil del Brasil, en su artículo 1363, al definir las sociedades civiles, no nos habla, como lo hace nuestra ley, de la finalidad relativa a la obtención de alguna utilidad apreciable en dinero; sino que alude a la unión de esfuerzos para lograr un fin común.

Concretada en estos límites, la característica de la sociedad civil, es fácil concluir afirmando su escasa o casi nula aplicación, toda vez que sus marcos jurídicos tendrían relativas aplicaciones a las sociedades casi siempre familiares, que en la práctica son poco frecuentes.

El Código único de las obligaciones y contratos de Suiza, sintetiza nuestro pensamiento al respecto.

Debemos hacer notar asimismo, para poner de manifiesto lo arcaico de nuestra legislación civil en materia de sociedades, que el proyecto franco-italiano del código de las obligaciones y contratos, en su artículo 531 cuando define el contrato de sociedad, nos habla también de la realización de un fin económico común, clasificando las sociedades en universales o particulares. Esas sociedades universales pueden referirse a los *bienes* o a las *utilidades* o *ganancias*. El





artículo 534 nos dice que la sociedad universal de los bienes tendrá por objeto todos los bienes presentes, sean muebles o inmuebles que incorporen los socios, haciéndola extensiva a las utilidades que puedan obtenerse. También autoriza la incorporación de los bienes que se obtengan con posterioridad a la constitución de la misma, con excepción de los que se adquieran por donación o por sucesión, y hasta autoriza para estos bienes, que se convenga la incorporación del provecho o producido de los mismos.

El artículo 535, se refiere a las sociedades universales que sólo comprenden las *ganancias* producidas tanto por la industria, cuanto por el goce que reportan los bienes muebles o inmuebles de los socios, sin que ello implique la incorporación al patrimonio social de estos bienes muebles o inmuebles de propiedad de los socios.

El artículo 538 del proyecto, legisla ya sobre las sociedades particulares, que son aquellas que tienen por objeto cosas determinadas, en cuanto a la explotación de su uso, o provecho de los frutos obtenidos, o también al producido del oficio o profesión.

Nuestro Código Civil, en cambio, en su artículo 1651, establece que *es nula la sociedad universal* de todos los bienes presentes y futuros de los socios, o de todas las ganancias que obtengan. Esta contradicción de criterios constituye un antecedente más que justificaria la legislación única en materia de obligaciones y contratos, en la cual se incorporarían las últimas reformas, resultado de los congresos jurídicos más recientes.

VIIIº. — El contrato de fianza también presenta antinomias entre la legislación civil y la comercial. Según el artículo 480 del Código de Comercio, el fiador no tiene el derecho de excusión que reconoce el artículo 2012 del Código Civil. El artículo 479 del Código de Comercio añade que cuando el fiador aceptado por el acreedor, espontánea o judicialmente, llegare al estado de insolvencia, no habrá derecho a exigir otro si el fiador no ha sido dado, sino en virtud de convención en que ha exigido el acreedor tal persona determinada para la fianza, y el Código Civil en la disposición del artículo 2001, a su vez, legisla que si el fiador después de recibido llegare al estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que sea idóneo.

El artículo 489 del Código de Comercio preceptúa que si el fiador cobrase retribución por haber prestado la fianza, no puede pedir su liberación cuando han pasado cinco años desde su otorgamiento, y el Código Civil no ha consagrado tal excepción en su artículo 2025.



IX. — Estas contradicciones entre la legislación civil y comercial, también existen en el contrato de depósito. El artículo 575, inciso 1º del Código de Comercio legisla en el sentido de que el depositario de una cantidad de dinero no puede usar de ella. Si lo hiciese, son de su cargo todos los perjuicios que ocurran en la cantidad depositada, aunque provengan de caso fortuito, y debe abonar al depositante los intereses corrientes; el Código Civil, a su vez, (arts. 2188 y 2189) sienta máxima diversa, facultando al depositario a usar de la cantidad de dinero que se le entregó, a no ser que estuviese en saco o caja cerrada con llave.

X. — Esas antinomias entre ambas legislaciones — civil y comercial —, se ponen de manifiesto igualmente en el contrato de prenda. El artículo 584, inciso 2º, de la ley mercantil, agrega que cuando la prenda consista en títulos de deuda, acciones de compañía o papeles de crédito, se verifica la tradición por la simple entrega del título, sin necesidad de notificar al deudor; y en el Código Civil (artículos 3209, 2390 y 2391), no se establece tal principio, sino tratándose de documentos al portador y de los negociables por endoso.

El Código de Comercio — artículo 585 —, autoriza al acreedor prendario a vender por sí en remate público la prenda; en cambio, el artículo 2334 del Código Civil requiere que esa venta se efectúe por orden de juez, también en remate público, con citación del deudor.

Al referirnos a la prenda común, debemos recordar la ley 9644, sobre prenda agraria, que establece principios especialísimos y la que ha sido incorporada al Código de Comercio, no obstante que la reforma al Código Civil pretenda legislar al respecto; lo que no es admisible.

XI. — En materia de privilegios, ya hemos visto el supuesto de la preferencia que la ley civil, en contra de la comercial, acuerda al vendedor no pagado. Esas contradicciones existen también en otros casos. Así, el artículo 129 de la ley de quiebras, en su inciso 3º, dispone que los salarios de los factores, dependientes y criados, gozan de privilegio general por los seis meses inmediatamente anteriores a la declaración de quiebra; y el Código Civil, en análogo supuesto, reduce ese plazo al de tres meses, para los *trabajadores a jornal*. (Art. 3880, inc. 3º).



XII. — El Código de Comercio, como legislación más adelantada, ha seguido en los supuestos a que hemos de referirnos, principios contrarios al Código Civil. El Código de Comercio no admite en cuanto a la prescripción, *ya sea entre presentes o entre ausentes*, la distinción que el Código Civil hace en cuanto a los plazos de la prescripción. Así el artículo 846 de la legislación mercantil añade que la prescripción ordinaria en materia comercial tiene lugar a los diez años, sin distinción entre presentes y ausentes; y, en cambio, el Código Civil con un criterio aún medioeval, tratando de favorecer sin razón al ausente en perjuicio del residente en el país, hace la diferencia entre presentes y ausentes, fijando plazos distintos. (Artículo 4023 del Código Civil).

Otro privilegio que reconoce el Código Civil, resabio de la antigüedad, que ha conspirado también contra la estabilidad de nuestro régimen inmobiliario, ha sido sin duda alguna el imperativo exegético del artículo 3966 del Código Civil, que estatuye que la prescripción no corre contra los menores de edad, estén o no emancipados, ni contra los que se hallen bajo una curatela. En cambio, el Código de Comercio, en su artículo 845 dispone lo contrario, al afirmar que todos los términos son fatales e improrrogables y corren indistintamente contra cualquier clase de personas, salvo el recurso que corresponde al incapaz contra su representante necesario.

XIII. — El artículo 221 del Código de Comercio define el mandato comercial en forma distinta de lo que hace el Código Civil, refiriéndose al mismo contrato, en el artículo 1869.

El artículo 1871 del Código Civil presume su gratitud, en contra de lo que establece el Código de Comercio, sin reparar que en la vida moderna, el criterio que debe prevalecer es el del Código de Comercio. (Artículo 221).

VII

Henry Capitant hace notar en su prefacio al código único de las obligaciones y contratos de Polonia, que la aparición de este código ha tenido una honda repercusión en el mundo jurídico. Su sanción definitiva representó la más alta manifestación en la evolución del derecho.

Sirvan, pues, estas expresiones de estímulo para los países que como el nuestro se encuentran abocados a la reforma de su legislación. Llevar a cabo esas reformas de los Códigos Civil y comercial,

sin incorporar esas conquistas ya consagradas por la ciencia jurídica contemporánea, significaría no seguir el ritmo de ese progreso.

Las naciones que han tenido mejores leyes han gozado de prosperidad material y de grandeza moral.

El *Código único de las obligaciones y contratos* debe constituir no sólo el programa de nuestra reforma, si que también el medio de aproximación con los países americanos que resuelvan incorporar a su legislación este código único, lo que significaría el comienzo de una era de unificación del derecho internacional privado en América.

